

1 el desorden global

Venezuela en la tormenta

Estancamiento del proceso bolivariano y golpe blando

Roberto Montoya

Contra todos los pronósticos de la derecha venezolana, el chavismo no se acabó con la muerte de Hugo Chávez. Más de quince años después del primer triunfo electoral de Chávez, el chavismo sigue en el poder. Afrontó 19 procesos electorales y solo perdió uno. El chavismo ha logrado sobrevivir al golpe de Estado de 2002, al brutal paro petrolero de ese año que duró hasta enero de 2003 y dejó unas pérdidas de 30.000 millones de dólares, y a un implacable acoso mediático nacional e internacional, en el que los principales medios del Estado español siguen teniendo un papel relevante.

El chavismo sigue en pie... aunque tocado. En el poco más de un año transcurrido desde la muerte de Chávez, la economía se deterioró enormemente —por la crisis mundial pero también por errores de gestión—; se han ralentizado, en ciertos casos drásticamente, algunas de sus principales grandes reformas sociales; el índice de pobreza, que en la primera década se redujo a la mitad, ha empezado a crecer nuevamente; y el proceso parece estancado, sin resolver los problemas estructurales de Venezuela. El *socialismo del siglo XXI* no avanza.

Y la derecha se envalentona, está impaciente, cree que golpeando aún más fuerte puede lograr tumbar al Gobierno, pero cada vez confía menos en las urnas. El sector de la oposición más recalcitrante no quiere esperar siquiera a 2015, a la mitad del actual mandato presidencial, cuando, según establece la Constitución Bolivariana —y ninguna otra en el mundo— tendría posibilidad de reclamar un referéndum revocatorio. Tiene prisa por recuperar el total de la gran porción de la renta petrolera de la cual gozó durante décadas, aunque no se le haya recortado más que parcialmente. El referéndum revocatorio, de carácter vinculante, permitiría la caída fulminante del Gobierno de Maduro por la vía constitucional.

En 2004, sólo dos años después del fracasado golpe de Estado y del sabotaje petrolero, la oposición hizo uso de ese derecho reconocido también en la Constitución, pero no logró reunir los votos suficientes para acabar con Chávez.

Y eso no lo puede soportar más el núcleo más ultra de la variopinta coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) liderado por María Corina Machado y Leopoldo López, y han decidido retomar su pasado golpista. Ambos provienen de familias de la oligarquía venezolana, como Capriles. Leopoldo López es hijo de una alta ejecutiva del Grupo Cisneros. Exalcalde del municipio de Chacao, próspera zona del este de Caracas, fue inhabilitado por la Contraloría en 2008 para postularse a cargos públicos hasta este año 2014, tras acusarle de graves irregularidades administrativas durante su gestión como alcalde. Miembro inicialmente del partido Primero Justicia de Henrique Capriles, terminó separándose de este para formar el partido Voluntad Popular.

Por su parte, Corina Machado, ingeniera industrial por la Universidad Católica, con máster en el Programa de Líderes Mundiales por la Universidad de Yale, hija del poderoso empresario del acero Enrique Machado Zuloaga, es líder y diputada del partido Súmate.

Su organización fue la que convocó en 2004 el referéndum revocatorio contra Chávez. Un año después era recibida en la Casa Blanca por George W. Bush.

Corina Machado rechazó participar en la mesa de diálogo propuesta por Maduro y lo justificó así en una entrevista a *El País*: “No permitiremos que el llamado al diálogo sea un engaño, una nueva traición que desmovilice la protesta para que el régimen gane tiempo y recupere su legitimidad internacional”.

Durante los años posteriores a su fracasado golpe de 2002, la oposición se mantuvo dividida y beligerante contra el Gobierno Chávez, y llegó a boicotear en 2005 las elecciones legislativas, lo que se le convirtió en un bumerán; permitió al chavismo un control absoluto de la Asamblea Nacional.

Después de duras luchas internas, finalmente en febrero de 2012 los 23 partidos componentes de la MUD celebraron elecciones primarias abiertas —organizadas y financiadas por el Estado, tal como establece también la Constitución Bolivariana— de las cuales el oligarca Henrique Capriles surgió como candidato presidencial.

La oposición cambió entonces su discurso, tranquilizó a los sectores populares prometiéndoles que, de llegar al poder, no se tirarían abajo las reformas que les habían permitido obtener derechos sociales negados durante décadas. La oposición vendió su cara *democrática* dentro y fuera del país, se *obrerizó*; Capriles cambió a sus asesores de imagen, intentó hacer olvidar que pertenece a una de las familias más ricas y poderosas del país —dueña de la Cadena Capriles de medios de comunicación, de la cadena de cines Cinex y de grandes inmobiliarias—, e intentó copiar a Chávez.

Cambió su indumentaria, empezó a vestir, como el presidente, gorras y chándal con los colores de la bandera venezolana, aprendió a utilizar con astucia el

desgaste del Gobierno, cada error, cada retraso en la aplicación de las reformas, cada revés económico, cada uno de los abundantes descalificativos e insultos que le dedicaban dirigentes del Gobierno.

Capriles logró con ello arrancar votos al chavismo, pero aún así perdió las elecciones de octubre de 2012, a pesar de que ya la enfermedad hacía estragos en Chávez y le impedía recorrer el país y realizar mítines como su adversario. Esa derrota desató ya las primeras duras críticas internas en la coalición opositora sobre cómo había llevado a cabo su campaña electoral Capriles. Pero aun así la MUD lo mantuvo como su candidato unitario frente a las nuevas elecciones que tuvieron lugar en abril de 2013, tras la muerte de Hugo Chávez.

Con Chávez fuera de la escena Capriles ya creía ver el poder a su alcance, se veía despachando pronto desde el Palacio de Miraflores, desmantelando poco a poco todo lo que el sistema bolivariano había arrancado a la más rancia burguesía venezolana desde 1999.

Pero Capriles volvió a perder. Le logró arrebatarse 600.000 votos al chavismo y perdió por la mínima, por 1,5% de votos, pero perdió. Vanos fueron sus esfuerzos por no reconocer el resultado.

Alimentar la violencia para provocar la caída de Maduro

Las críticas internas dentro de la MUD arrojaron contra Capriles. El sector más derechista sostuvo ya entonces que el malestar de la calle tenía que aumentar mucho más, que debía generalizarse para poder ser capitalizado por la coalición opositora. Corina Machado y Leopoldo López reclamaron a Capriles que no aceptara el resultado y que convocara a sus millones de votantes a salir a la calle hasta conseguir la caída de Maduro. Varios gobiernos, entre ellos el de Obama, el de Rajoy, la UE, demoraron tiempo el reconocimiento del triunfo electoral de Maduro, a la espera de que la oposición actuara, lanzara una contraofensiva y la situación se pudiera revertir. Obama no lo ha reconocido aún.

Pero Capriles, respaldado por otros sectores más moderados de la MUD, se negó a la presión de su ala más dura y antidemocrática y se replegó, pero la ebullición interna siguió avivándose en la coalición opositora.

Y la revuelta interna terminaría estallando tras una nueva derrota electoral. En diciembre de 2013 la MUD volvía a perder en las elecciones municipales frente a los candidatos del gubernamental PSUV y sus aliados. Aunque la oposición logró arrebatarse al oficialismo ciudades importantes como Barinas, Barquisimeto, Maturín o Valencia, y mantener también la Alcaldía Metropolitana de Caracas y Maracaibo, los candidatos del PSUV y sus aliados en la coalición Gran Polo Patriótico (GPP), y un puñado de candidaturas chavistas alternativas, se hicieron con el control de 255 de las 337 alcaldías.

Fue a partir de esa nueva derrota que se aceleró el golpe blando que venía tomando cuerpo desde hacía tiempo, una variante del mismo método ya

practicado en Honduras para derribar al presidente Zelaya, en Paraguay para hacer otro tanto con el presidente Lugo, y que se intentó en Bolivia contra Evo Morales pero fracasó.

La gran burguesía venezolana, tan ultraliberal y pro imperialista como la chilena que a inicios de los 70 boicoteó con dureza al presidente Allende durante años y abrió las puertas para el golpe de Pinochet de 1973, sincronizó los tiempos con su brazo político, con la oposición parlamentaria más dura. Y utilizó sus armas de siempre, el acopio de mercaderías, el desabastecimiento, la especulación con las divisas, no ya solo para beneficiarse económicamente, sino también para avivar el malestar social.

Corina Machado y Leopoldo López decidieron desbordar a la dirección de Capriles y provocar una situación de hecho. Lo anunciaron formalmente en rueda de prensa el 23 de enero pasado y llamaron a su ofensiva *La Salida*.

Montados sobre reivindicaciones estudiantiles de las zonas más ricas y sobre el malestar social provocado por la carestía de la vida, una inflación del 54% y la inseguridad ciudadana, convocaron a la movilización general e indefinida de la población. Dejaron de lado las formas parlamentarias e iniciaron una política abierta de acoso y derribo del Gobierno, un golpe blando... al menos hasta ahora.

La violencia callejera se desató, a las piedras y cócteles Molotov iniciales se unieron las armas de fuego, el uso de francotiradores, el derribo de árboles para formar barricadas o la instalación de “guayas” (alambres de púa fijados de acera a acera ante las barricadas, a la altura del cuello de los motoristas) que provocaron la decapitación de varias personas. Entre los muertos hubo tanto manifestantes opositores como miembros de los “colectivos” (círculos de base chavistas), miembros de la Policía Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana, o conductores de vehículos que no pudieron esquivar a tiempo las “guarimbas” (barricadas).

La oposición hizo circular por las redes sociales denuncias de un número de supuestos crímenes cometidos por fuerzas chavistas y de los cuerpos de seguridad muy superior a los casos que finalmente se denunciaron ante los tribunales. Hizo circular igualmente numerosas fotos de represión policial que en realidad no correspondían a los choques en Venezuela sino a los de otros países, como Ucrania y hasta de Alepo, en Siria.

El Gobierno mostró públicamente decenas de las fotos originales, con sus respectivos pies, al lado de los pies de foto falsificados por la oposición para aumentar la ira de la gente y provocar la denuncia internacional. Solo un puñado de medios internacionales se hizo eco de las denuncias del Gobierno sobre esos burdos montajes fotográficos^{1/}.

1/ (<http://www.publico.es/internacional/503605/la-oposicion-venezolana-falsifica-fotos-de-otros-paises-para-simular-represion-chavista>).

En algún caso los manipuladores de las fotos con Photoshop se olvidaron incluso de borrar de la espalda de los policías el poco castellano cartel de “Police”. Pero las fotos trucadas surtieron su efecto, numerosos medios locales y extranjeros reprodujeron las fotografías falsas.

La Fiscalía general del Estado abrió en cualquier caso una investigación sobre abusos cometidos por más de 20 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y del Sebin (Servicio de Inteligencia). Maduro, por su parte, desautorizó públicamente la violencia de “grupos que se dicen chavistas”, negando cualquier utilización de grupos parapoliciales por parte del Estado.

Desde el bando de la oposición no hubo en cambio crítica alguna contra la organizada y extrema violencia practicada en las calles por opositores, no pocos de ellos armados con armas de fuego.

Tras la detención de López, el liderazgo de Corina Machado ha subido como la espuma, y ha cuestionado abiertamente a Capriles, que ha pasado a un segundo plano. Su objetivo es a todas luces provocar una situación insostenible que dé lugar a una suerte de “caracazo” que permita quitar del poder a Maduro. El ejemplo de Ucrania los ha estimulado a seguir esa vía, cuestionando de hecho el liderazgo de Henrique Capriles en la Mesa de la Unidad Democrática.

Precisamente los principales choques callejeros que tuvieron lugar en Venezuela en febrero y marzo pasado coincidieron con la fecha en que tuvo lugar 25 años antes el popular Caracazo. Este comenzó el 27 de febrero de 1989 y terminó el 8 de marzo, ahogado en sangre por el Gobierno del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez. Hubo cientos de muertos.

Pero la gran diferencia entre ambos es que el Caracazo fue realmente una insurrección popular espontánea de los más humildes y postergados de Venezuela contra las cruentas medidas de ajuste impuestas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez y el FMI, mientras que las protestas de 2014, aunque participaran sectores populares descontentos en ella, fueron instigadas por los más poderosos sectores de la alta burguesía ultraliberal y parasitaria y su representación política, la MUD, con intereses exactamente antagónicos a los que dieron origen al Caracazo.

Sin cambios estructurales el proceso se estanca

Ni Chávez ni Maduro han tirado abajo el sistema de producción ni las estructuras fundamentales del capitalismo. Los intereses esenciales de la oligarquía tradicional venezolana solo se han visto afectados hasta ahora por nacionalizaciones de ciertas empresas de importancia estratégica, por el control sobre su especulación con las divisas, por una mayor presión fiscal o por la reforma laboral. Pero para ellos ya eso es demasiado, intolerable.

Para esos poderosos sectores que controlan la importación —en un país que lo importa casi todo a excepción del petróleo— y la distribución, Chávez era un *comunista* y Maduro lo es también, de la misma forma en que lo es también el mismísimo Obama para el Tea Party.

No pueden aceptar que el gobierno intente controlar —no muy eficazmente por cierto— el macrojuego especulativo que han hecho siempre con las divisas que el Estado les concede a un cambio preferente para poder importar todo tipo de productos. Es una operación constante, de millones y millones de dólares, que les ha venido aportando pingües beneficios, como a los grandes productores-exportadores de la soja en Argentina.

Tanto en Venezuela como en Argentina, el control de ese gran volumen de dinero y su uso especulativo dispara el mercado negro de divisas y permite utilizar como arma a su antojo la distribución de mercaderías y el desabastecimiento.

Los dos gobiernos han adoptado algunas medidas similares para enfrentar este fenómeno que socava la economía, afecta a la cotización de sus monedas nacionales, dispara los precios que paga el consumidor y genera en consecuencia un gran malestar social e ira popular.

En el caso de Venezuela, la Comisión de Administración de Divisas (Cadi-vi), el organismo que debe autorizar la venta de divisas a precio preferente a los importadores privados, entrega entre 120 y 150 millones de dólares diarios con ese fin, muchos más que en la época de Chávez. Las propias autoridades reconocen que al menos el 20% de ese volumen termina en manos de personas que no las utilizan con ese fin, que la usan en realidad para cambiarlas por bolívares en el mercado negro, obteniendo siete veces el valor que han pagado al Estado por esos dólares, o lo envían a paraísos fiscales.

A importadores y distribuidores se les exige ahora demostrar el uso que han hecho de esas divisas otorgadas por el Estado a precio preferente, el tiempo que han demorado en utilizarlas para ese fin, y el tiempo transcurrido también hasta la entrada de las mercaderías en el circuito de distribución y llegada a los mercados y grandes superficies. Y tanto en Venezuela como en Argentina se han impuesto importantes sanciones a los grandes distribuidores que almacenaban mercaderías para provocar desabastecimiento y encarecer aún más los productos.

El gobierno venezolano ha impuesto igualmente sanciones a numerosas empresas, grandes superficies y tiendas —muchas de ellas españolas— que han respondido a cada una de las numerosas devaluaciones del bolívar habidas en estos años con aumentos en los precios de sus productos en un porcentaje muy superior a la caída de la moneda. Las autoridades convocan igualmente a los consumidores a denunciar abusos en los precios de tiendas y grandes superficies, llamando al número gratuito 0800-SABOTAJE.

Miles de funcionarios públicos, y también soldados, han sido movilizados para controlar periódicamente los precios que se aplican en las tiendas.

Maduro ordenó también en diciembre de 2013 la creación del Órgano Superior de la Economía, un nuevo ente con el que pretende hacer frente más eficazmente a la guerra económica que libra con esos sectores, pero muchos temen que solo sirva para engrosar la ya gigantesca estructura burocrática estatal.

A la corrupción e ineficacia en los organismos que deben controlar a quiénes se les otorgan esas divisas a precio preferente y cómo y para qué las utilizan, se suma el hecho de que una parte de esos beneficiarios son pro gobierno, forman parte de la *boliburguesía*, de esa burguesía que ha ido creciendo bajo el paraguas del chavismo durante estos quince años. Tanto Chávez en los últimos años como Maduro desde que está en el poder, han tomado medidas contra algunos de los poderosos personajes de la propia *boliburguesía* que defraudaban al Estado con métodos similares a los utilizados por la gran burguesía.

Pero las medidas que se han adoptado contra ellos han sido puntuales, cuidando que ello no provoque un enfrentamiento abierto con ciertos barones del PSUV que los protegen, que tienen negocios con esos sectores. Son muchas las familias que coexisten en el PSUV y Maduro intenta jugar un papel de Bonaparte evitando choques y rupturas que podrían debilitarlo y dejarlo a merced de una poderosa oposición, con padrinos aún más poderosos en el exterior.

Esa situación es un secreto a voces en Venezuela, y genera cada vez más críticas en el seno del PSUV entre los sectores más honestos y corrientes internas de izquierda como Marea Socialista.

Sin profundizar el proceso bolivariano, tal y como pretendía Chávez y quedó planteado en el llamado *Programa de la Patria 2013-2019*, Maduro solo pone parches a la crisis y a la inestabilidad política y social, mientras a causa de los problemas económicos retrocede gradualmente en algunos de los importantes avances hechos en ese país desde 1998 y que constituyen el principal capital del chavismo.

No se han dado pasos reales para acabar progresivamente con una política extractivista y rentista donde el petróleo lo es todo, y las reformas, las ambiciosas *misiones*, se desarrollan o se ralentizan —cuando no se paralizan directamente— en función de los vaivenes del mercado mundial. Y el precio mundial del barril de petróleo cayó de los 114 euros en 2008 a 71 euros en 2013. De una producción de 3,3 millones de barriles diarios en 1999 se bajó en solo cuatro años a 2,5 millones y casi un millón se vende a precio preferente a Cuba y a los 17 países que forman parte de Petrocaribe.

A la oposición le enerva que Venezuela proporcione 103.000 barriles diarios a los países de Petrocaribe —el 43% de la energía total que necesitan— la mitad de cuya factura pueden pagar en plazos de hasta 25 años, y promete cancelar todos esos acuerdos de llegar al poder.

La creciente autonomización energética de EE UU gracias a la brutal perforación de Alaska y a la extensión de la devastadora y contaminante técnica del *fracking* hará también disminuir sus compras de petróleo venezolano en los próximos años. Pese al declarado objetivo de Chávez de incentivar y diversificar la producción industrial nacional, poco se ha avanzado en ese sentido. Como poco se ha avanzado en otro de los grandes objetivos de Chávez: el de alcanzar la soberanía alimentaria.

La mayor parte de los millones de hectáreas confiscadas por el chavismo para estimular la *vuelta al campo* de miles y miles de personas organizadas en cooperativas y establecer un canal para vender sus mercaderías a través de canales de distribución controlados por el Estado ha perdido totalmente fuelle, como tantas campañas nacionales que van quedando por el camino. Hay más tierras que gente para trabajar esas tierras confiscadas y la gestión adolece de graves problemas. La soberanía alimentaria es por ahora solo un proyecto.

Y, al no plantearse siquiera seriamente la nacionalización del proceso de importación y distribución de mercaderías, el Gobierno se limita a responder a cada una de las maniobras especulativas y desestabilizadoras de esa gran burguesía parasitaria que intenta resistir hasta la más tímida medida reformista de Maduro.

Cambio favorable en América Latina y el Caribe

El Gobierno bolivariano estaría en una situación aún peor si la oposición contara con el apoyo internacional que tuvo en 2002 para llevar a cabo el golpe de Estado y el sabotaje petrolero. El peso que han ido tomando los organismos regionales desde entonces, en gran medida gracias al impulso que les dio Hugo Chávez, se ha vuelto a notar ante la actual crisis en Venezuela.

Pese al intento de EE UU para que la OEA (Organización de Estados Americanos) condenara al Gobierno venezolano, en la declaración que aprobó ese organismo con el apoyo de 29 de sus Estados miembros —solo votaron en contra EE UU, Canadá y Panamá— se dio un apoyo explícito a Venezuela y a los esfuerzos de su Gobierno “a favor del diálogo y la paz”. Corina Machado quedó frustrada por la declaración, tras asistir a la reunión de la OEA para “contar la verdad”, participando como miembro de la delegación panameña, hecho insólito que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas de Venezuela con Panamá.

El Gobierno de Maduro recibió igualmente un abierto respaldo de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas); como de Mercosur, organismo que condenó “los intentos de desestabilizar el orden democrático”, y de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), que alentó a Maduro “a continuar los esfuerzos para propiciar un diálogo entre todas las fuerzas políticas”.

El Gobierno venezolano está arropado hoy día como nunca por la casi totalidad de los países de la región, un capital de gran valor. Su futuro ahora depende no solo de cómo sepa enfrentar el durísimo pulso que libran contra él la gran burguesía venezolana y sus representantes políticos, sino también, y principalmente, de si se atreve o no a profundizar, a radicalizar el proceso con cambios estructurales. El futuro del movimiento bolivariano se juega en la resolución de esa encrucijada.

Roberto Montoya es miembro del Consejo Asesor de *VIENTO SUR*.